Tomado de **El Nacional.** Caracas, 13 de Julio de 1980, A-5

EL SISTEMA POLÍTICO DE LA DICTADURA PÉREZJIMENISTA

Daniel Ibarra

I

Después de transcurridos treinta y cinco años del derrocamiento del último gobierno de "carácter militar" que rigió los destinos de Venezuela en el siglo actual, los estudios y el interés por comprender aquel período se han multiplicado notoriamente. Las razones a las que obedece este "fenómeno" se relacionan, en no poca proporción, con los ocultamientos y distorsiones que respecto a él, se encuentran en la información divulgada por quienes historiaron inicialmente su existencia.

En efecto, en razón de intereses personales y de partido, pasiones personales y de partido; en general, razones políticas y, en algunos casos, ideológicas, el conocimiento "popular" sobre las características del régimen, está lleno de lugares comunes y tergiversaciones acomodaticias.

Por otro lado, y en relación con el particular devenir de los gobiernos "democráticos" que le sucedieron, se ha desarrollado un cierto proceso de legitimación de la dictadura al cual -incluso- han contribuido profesionales universitarios e intelectuales (legitimando con ello las racionalizaciones de Vallenilla Planchart), en función de los "logros" alcanzados en relación con nuestro crecimiento industrial y

Presente y Pasado. Revista de Historia: Año I Nº 2 Mérida - Venezuela. (Julio - Diciembre de 1996), pp. 67 - 85.

económico (a Marcos Pérez Jiménez, personaje fundamental de este período, de alguna manera se le define como padre de la industrialización nacional).

Parte de las distorsiones informativas que dominaban el escenario nacional, se reflejaban en un acentuado interés en establecer una identidad estrecha entre los desmanes y perversiones del régimen y la persona de Marcos Pérez Jiménez; interés que buscaba ocultar la vinculación que, con el régimen a todo lo largo de su duración, mantuvieron importantes grupos de interés, quienes se vieron beneficiados considerablemente por las relaciones económicas (negociados), que con el desarrollaron. La **re-visión** de este período histórico pudiera, quizás, arrojar claridades que generen una mejor comprensión de los hechos políticos que en él tuvieron cabida.

II

Siguiendo las propuestas de la profesora Ocarina Castillo,[1] se puede afirmar que lo que se conoce como el "período de la dictadura" el cual se extiende entre 1948 y 1958, está conformado evidentemente, por tres momentos diferenciables con cierta precisión.

El primero de ellos, se puede delimitar entre los años de 1948 fecha en la cual se instaura una junta militar que sustituye al gobierno constitucional del escritor Rómulo Gallegos y el año de 1952 cuando mediante los "oficios" de un fraude electoral, Marcos Pérez Jiménez asume el desarrollo de un gobierno o régimen abiertamente dictatorial.

Dentro de esta primera fase, observamos un hito en el año de 1950 cuando es asesinado Delgado Chalbaud, presidente de la Junta, con cuya muerte se diluye un punto de tensión dentro del gobierno militar.[2] Este punto de tensión estaba expresado en dos tendencias mutuamente excluyentes: 1) la posibilidad de reanudar el hilo constitucional, representada por Carlos Delgado Chalbaud; 2) La intención de que los militares mantuviesen el control del poder, posición sostenida, principalmente, por Pérez Jiménez.

El segundo momento, se extiende desde la oportunidad de la consumación del fraude electoral (1952) por medio del cual se despoja al partido Unión Republicana Democrática (URD) del triunfo obtenido en forma abrumadora, hasta el año de 1957 momento durante el cual el régimen alcanza su máximo esplendor.[3]

El último momento, se prolonga de 1957 hasta los comienzos de 1958, momento en que el estado de crisis del sistema hace que se derrumbe (con "una pequeña ayuda de sus enemigos") y es derrocado el gobierno el 23 de Enero de aquel último año.[4]

III

El objeto de nuestra atención está representado en el enunciado ***Insumos del Sistema***, es decir, dentro de la perspectiva del llamado Análisis de Sistema, aquellos elementos que con su actuación contribuyeron a motorizar el proceso político que distinguió este momento de la historia reciente de Venezuela.

Abordar esta temática, nos impone hacer ciertas precisiones previas que nos van a servir para orientar la elaboración de nuestra información y presentar aquellos que consideramos los "datos" que sustancian esta exposición.

En primer lugar, nos es de suma utilidad la noción de **Rol o Papel**, en la medida en que está relacionado con el proceso de adopción de decisiones en nombre de la sociedad. Igualmente, está asociado con las actuaciones que proceden en ejecución de esas decisiones y con la asignación de "costos y beneficios".[5]

El conjunto de estos "papeles políticos" y su comportamiento consiguiente, constituyen lo que podemos llamar el **Sistema Político**. La importancia del sistema, radica en que su función es la de seleccionar los fines colectivos de la sociedad y movilizar los recursos necesarios para su consecución.[6]

Cuando hablamos de insumos dentro del contexto del sistema político, pensamos en las relaciones (y sus tipos) que se establecen entre los diferentes actores (papeles) e intereses del sistema. Así, y en términos generales, puede hablarse de la existencia

de dos tipos básicos de insumos: **Demandas y Apoyos**[7] . Ambos nos permiten inquirir acerca de ¿quién hace qué demandas, o expresa cuáles apoyos?; así mismo, ¿cómo, cuándo, con cuáles consecuencias?.

La conjunción o confluencia de este grupo de "elementos" cobra su importancia lo hace, precisamente, dentro del proceso de la toma de decisiones; es decir, de la se lección de las demandas que habrán de ser respondidas. Para entender este momento, es necesario considerar como sus referentes inmediatos cinco condicionantes: 1) Consecución de fines; 2) Adaptación; 3) Integración; 4) Conservación del sistema y 5) Solución de tensiones y conflictos.[8]

Estos "condicionantes" son comprensibles como **situaciones** que pueden plantearse en forma simultánea, que se hace necesario controlar teniendo como catalizador -como ya lo indicamos antes- los costos y beneficios que se contemplan.

A partir de estos señalamientos generales, podemos plantearnos algunas preguntas que dirijan nuestra reflexión. En primer lugar, ¿cuál es ese fin colectivo de la sociedad conceptualizado por la "dictadura" y para el cual ella se propone como respuesta, y cómo se propone alcanzarlo?. En relación con las respuestas por parte de la sociedad civil ... ¿Se consiguió generar adhesión o apoyo de parte de esta?, ¿cómo?. En segundo lugar, ¿quiénes son los actores básicos del período, ¿cuál fue su papel? y, además, ¿qué relaciones de poder se establecieron?.

Las respuestas a este conjunto de formulaciones, pueden y deben ser encontradas y diferenciadas en el devenir de los acontecimientos ocurridos en aquél período. Es necesario añadir, que se pueden reconocer dos ámbitos dentro de los cuales se desenvuelve nuestra problemática; y en ambos, podemos descubrir los factores a los cuales hemos hecho mención. Estos son, por un lado, el ámbito o espacio interno con sus actores, demandas y apoyos colaterales. Por el otro, el externo que se refiere al contexto de las relaciones internacionales.

IV

Se puede decir que la propuesta política del régimen militar-dictatorial de la década de 1948-58 tiene una referencia o punto de vista teórico que puede ser ubicado o identificado con el pensamiento positivista que viene ocupando un lugar importante en la vida intelectual del país desde finales del siglo XIX. Sus postulados pueden asociarse con el hincapié que se hace sobre la necesidad de imponer un orden político y social que haga posible el desarrollo económico del país.[9]

De ese modo, la consecución y mantenimiento del orden político y social, se convierte en un prerrequisito indispensable para transitar el camino del progreso. Esta idea ya la había sostenido en Venezuela toda una pléyade de intelectuales vinculados con el régimen gomecista del primer tercio del siglo XX.[10]

La expresión concreta de este punto de vista es conocida en el planteamiento que se dio en llamar: **El Nuevo Ideal** (NIN) el cual se puede resumir en sus dos ideas básicas; a saber: transformación racional del medio físico y mejoramiento intelectual, material y moral del país. Estas dos ideas se traducen en el uso y desarrollo de nuestras reservas morales y entre la utilización adecuada de nuestros recursos para el mejoramiento de nuestras condiciones de vida.[11]

Esta proposición emerge de un contexto caracterizado por la inestabilidad y la confrontación política entre todos los grupos o partidos políticos del país, los que tenían como centro de atención o referencia la actitud desarrollada por el partido Acción Democrática (AD), que fue comúnmente calificada como sectaria e incluso, como una conducta dictatorial.[12]

Gonzalo Veloz Mancera, a nombre de las Fuerzas Armadas (FFAA) pronuncia unas palabras que expresan la interpretación que dicha institución tiene acerca de la situación nacional:

"Las Fuerzas Armadas Nacionales ante la incapacidad del gobierno nacional para resolver la crisis existente en el país, en vista de la intromisión de grupos extremistas en la vida nacional, puesta de presente ... por la decisión de una huelga general de dimensiones incalculables y ante la incitación a las masas para cometer actos vandálicos y alterar el orden, han asumido plenamente el control de la situación para velar así por la seguridad de toda la nación y lograr el definitivo establecimiento de la paz social en Venezuela...".[13]

Entre los años de 1948 y 1952, se vive este clima de tensiones políticas que son utilizados como justificación para la consumación del golpe de Estado de 1948 y del fraude electoral de 1952.

La posición de AD partido desalojado del poder, se puede descubrir en la amplia descripción que, de la situación nacional, presentan en el Libro Negro **1952**, donde por boca de uno de sus más importantes dirigentes Leonardo Ruíz Pineda, señala:

"El grupo faccioso que capturó el poder ... no personifica concepción teórica alguna ni sus actos de gobierno obedecen a orientaciones programáticas, ni su conducta administrativa está inspirada en ideologías o estrategias políticas sujetas a motivaciones filosóficas ...".[14]

Más adelante, en este mismo libro, Ruíz Pineda pronuncia una disposición que, de alguna manera, refleja lo que el régimen aducía de AD: su conducta extremista: "... nos señalamos la tarea de impedir la estabilización del régimen usurpador ...".[15]

Esta justificación es lo que le permite imponer una serie de medidas que conducen a la desmovilización política y social del país. Desde 1948, se viene revocando los derechos civiles y políticos de los venezolanos: se disuelven los organismos de carácter institucional del país: el Congreso de la República y sus cámaras, las Asambleas Legislativas, los Consejos Municipales, etc. Igualmente, se ilegalizan algunos partidos políticos, sindicatos y agrupaciones estudiantiles.También, se había disuelto el Consejo Supremo Electoral (CSE) y sus dependencias en todo el país.[16]

Se afirmaba que las propuestas del régimen debían ser puestas en funcionamiento por las FFAA quienes representaban la garantía del orden frente al caos desatado por los partidos políticos; aquella institución, vive alrededor de una idea que puede sostener este esfuerzo: el principio de autoridad.

Dentro de todo el período, se pudo observar una evidente prosperidad económica que fue aprovechada por el sector privado así directamente como por medio del gasto público.[17] Se desarrollan importantes obras públicas: autopistas, viviendas, la Siderúrgica del Orinoco, la Petroquímica, la Ciudad Universitaria. Igualmente, está en marcha un ambicioso plan de carreteras, ferrocarriles y electrificación.[18]

Para aquél entonces, todo el desarrollo económico y social se centra sobre la coyuntura de un aumento de la producción y exportación del petróleo y del hierro, además de una reformulación de los términos de comercialización de los mencionados bienes con los Estados Unidos (EEUU); nuevos términos que generaron importantes ventajas para el país: 1) asegurar el mercado y un mejor tratamiento al petróleo; 2) protección a la producción agropecuaria e industrial del país.[19]

En resumen, se puede señalar que "a juicio de los militares", las realizaciones económicas y tecnológicas del régimen se debían convertir en la fuente de la legitimación del ejercicio gubernamental. Para ellos el tractor (Bulldozer) debía convertirse en el símbolo o imagen de la política del gobierno. En el momento de la comisión del fraude electoral de 1952, Vallenilla Lanz (h) señala: "... el problema era escoger entre el resultado del sufragio y el desarrollo del país (...) Conservemos el poder y tratemos de legitimarlo con una labor trascendente y fecunda".[20]

V

El principal "gestor" evidente del proceso vivido por Venezuela entre los años que nos ocupan, es -obviamente- el ejército. Durante la mayor parte de este período, las FFAA se presentan a los ojos del país como una "institución unificada", como una corporación que actúa a nombre del interés nacional. Como dijimos antes, las FFAA emergen como una garantía de orden ante la conflictiva situación política nacional.[21]

Algunos sectores del ejército apoyan al gobierno y a Pérez Jiménez desde un punto de vista profesional, no obstante, este había sido uno de los oficiales más brillantes en su período de formación. Otros sostenían una actitud militarista: es decir, son partidarios de un gobierno militar fuerte y sin contemplaciones.[22]

Desde 1948, tras el poder se movían tendencias en direcciones divergentes y las mayores presiones se ejercían sobre Delgado Chalbaud y Pérez Jiménez. Las presiones sobre el primero -y en contraste con el segundo- se ejercieron en función de su condición de "político" más que militar y de su inclinación hacia la restauración del hilo constitucional y la elección de un gobierno civil.[23] Esta confrontación, se solventó -como dijimos- con la muerte de Delgado en 1950; de aquí en adelante, ejerce su dominio la tendencia militarista hasta los momentos de crisis en las bases de sustentación del régimen.

Aparte de esta señalada obviedad, existe plena coincidencia en considerar que desde un principio existió un amplio consenso entre los diferentes sectores sociales en pro del derrocamiento del gobierno de Rómulo Gallegos. Podemos destacar la actitud de anuencia sostenida por dos sectores de vital y trascendental significación: los empresarios (productores e industriales) y la Iglesia católica; los primeros por el clima de agitación en el que vivían, generado por la política populista hacia los trabajadores desarrollada por AD; la Iglesia, por el anticlericalismo expresado por este partido y los obstáculos que le planteaban a su labor evangelizadora.[24]

Al lado de estos, actúan también algunos partidos políticos, particularmente, Unión Republicana Democrática (URD) y COPEI, quienes recibieron con beneplácito la expulsión de AD del poder ya que ellos se consideraban víctimas de su sectarismo político. De hecho, aquellos partidos tuvieron una cierta responsabilidad en la legitimación del régimen desde que acordaron formar parte de la comisión que redactó el Estatuto Electoral para las elecciones de 1952.

Posteriormente, estos mismo sectores, grupos o actores sociales, asumieron, igualmente en "bloque", una actitud opositora abierta o velada a las actuaciones del

régimen, fundamentalmente en la llamada etapa final de su ejercicio. En este momento, tienen una participación destacada el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y AD, quienes componen junto con URD, la **Junta Patriótica** que dirigirá la organización clandestina de la oposición al gobierno de Pérez Jiménez hasta 1958.

VI

La emergencia de los militares en función de gobierno dentro de nuestro período, impulsaba el que, para el desarrollo de sus proposiciones, se buscase la integración de la comunidad en el proceso y, para ello, era posible acudir a dos expedientes: 1) crear consenso en la sociedad sobre las actuaciones de gobierno, y 2) actuar en forma implacable en contra de la opinión de los disidentes y opositores. En la realidad, ambas opciones fueron aplicadas.

Como ya señalamos, en un primer momento existió consenso claro en torno a la constitución de un gobierno militar. En razón de la situación política concreta, la sociedad civil manifestó su apoyo ante los hechos consumados.

En adelante, y quizás en busca de una mayor adhesión social, el gobierno (considerado en sus diferentes etapas) desarrolló toda una política de "beneficios" sociales que le atrajeron la voluntad de los venezolanos en su conjunto; política que se apoyó en la mencionada bonanza fiscal producida por medio de la comercialización del petróleo y el hierro, a la par del otorgamiento de numerosas nuevas concesiones para la explotación del hidrocarburo.

En diversos momentos y situaciones, el gobierno implementó medidas que tendían a proteger la producción agrícola e industrial venezolana frente a las importaciones. Esta conducta fue apoyada y aprovechada por los productores nacionales quienes afirmaban que "satisface las justificadas necesidades de protección de industrias indispensables para el desarrollo económico de nuestro país".[25]

Por otro lado, se desarrolló un programa de construcción de viviendas, canalizado por el Banco Obrero, destinado a las clases trabajadoras del país. Igualmente, el

sector militar se ve reforzado por dos conductas: 1) Participación de oficiales ejerciendo numerosas funciones de gobierno; 2) iniciando un proceso de modernización y tecnificación, a la par de una ampliación de la seguridad social de la que gozan (se construyen viviendas destinadas específicamente, para oficiales de baja graduación).

Todo este conjunto de desarrollos le ganó, desde un principio, la confianza nacional al régimen. Más aún, cuando progresivamente se fueron "restituyendo" las garantías constitucionales: libertad de expresión, libertad de asociación, retorno de los exilados políticos, etc., etc.[26]

Simultánea y paralelamente, el régimen militar y especialmente, el régimen dictatorial de Pérez, desarrollan una política que tiene como miras alcanzar apoyo a nivel externo, internacional. Es necesario señalar que su desempeño se ubica dentro del ámbito de la **Guerra Fría**; política que inspirada y dirigida por los Estados Unidos (EEUU) para "frenar" el avance comunista, cobra su máxima expresión en América en la **doctrina de seguridad continental (y nacional)** y en la llamada **Internacional del Sable**, su consecuencia. A nivel mundial, tiene su mayor expresión en la Guerra de Corea de 1951.[27]

El régimen militar venezolano encuentra, en esta coyuntura, la oportunidad de legitimarse en el mundo externo, participando activamente en la lucha contra el señalado enemigo; entre otras actuaciones se rompen relaciones con la Unión Soviética (URSS) tras un incidente provocado por la policía del régimen, en el cual funcionarios soviéticos son agredidos incluso físicamente. Igualmente, con posterioridad, se rompe relaciones con Checoslovaquia. Todo esto acontece en junio de 1952.[28]

En este mismo año, Nelson Rockefeller, en declaraciones a Simón Alberto Consalvi, exclama su sorpresa por el espectacular progreso alcanzado por Venezuela en los últimos años y agrega que ampliará sus inversiones en la distribuidora de Alimentos de su propiedad que llamaría más tarde CADA.[29]

Igualmente, y dentro de este mismo contexto, los Presidentes de Venezuela y Colombia, Pérez Jiménez y Roberto Urdaneta Arbeláez, firman una declaración de unidad para combatir la amenaza comunista.

Siempre con la misma intención, se procede a la invitación de personalidades internacionales a las celebraciones que se llamaron: **La Semana de la Patria**, durante las que se hacían visitas a los principales lugares en los que los desarrollos tecnológicos y económicos impulsados por el gobierno se encontraban.

El máximo evento lo representa la realización, en Caracas, de la **X Conferencia Interamericana,** de cuyo seno surgió la condena al proyecto político guatemalteco dirigido por Jacobo Arbenz. Condena que condujo al derrocamiento de su gobierno en el año de 1954 de manos del General Castillo Armas.

Todo este conjunto de sucesos hicieron posible que el secretario de Estado estadounidense, Dulles, se pronunciara elogiosamente del régimen de Pérez Jiménez, alabando que con su existencia y la de otros similares en Latinoamérica, había suficiente seguridad contra el comunismo.

VII

En un intento de síntesis personal por explicar las relaciones de poder que se producen entre los diferentes autores e intereses que confluyen en el escenario político venezolano del período militar, podemos decir que se puede observar cuatro tipos diferentes, cada una con variaciones coyunturales según el momento al cual hagamos referencia.

En primer lugar señalaremos las que se establecen entre los mismos militares. En principio se observaron dos posiciones en este sector: la militarista y la "constitucionalista" a las cuales ya nos hemos referido con anterioridad, posiciones que unieron su cauce a raíz del asesinato de Delgado Chalbaud en 1950.

Sin embargo, a pesar de esta cohesión, pronto se hicieron sentir divergencias entre las FFAA y el gobierno, el cual era acusado de sucumbir a las seducciones burocráticas del poder y de abandonar las banderas del 18 de octubre. Estas disidencias, personalizadas por los oficiales Castro León y Moncada Vidal entre otros, pronto también son enfrentadas y derrotadas. Los oficiales implicados son detenidos, exilados o pasados a retiro.[30]

Se abre un compás de estabilidad que se va cerrando en la medida en que el régimen, a su vez, se va cerrando sobre sí mismo -en una suerte, nada extraña, de **autismo político**- y comienzan a resquebrajarse las bases de sustentación por las cuales se mantiene. Llega a producirse el momento cuando el régimen desconfía de todo y de todos y asume una actitud de reto frontal a las FFAA, llegando a las amenazas directas y a la detención de oficiales acusados de conspiración, sólo por exigir reivindicaciones salariales y sociales.[31]

En el ínterin, se producen diversos alzamientos militares que son sofocados, por ejemplo el alzamiento de una base aérea vinculado con la huelga petrolera de Mayo de 1950. En otro momento, se planificó, en conjunción con los partidos AD y PCV, el asesinato de los miembros de la Junta de Gobierno, "gestión" a la que seguiría un alzamiento encabezado por militares de diversa graduación.[32]

El segundo tipo de relación se establece entre la llamada "burguesía nacional" y el gobierno. Entre estos sectores se genera una relación interna de negociaciones y complicidades. En función de las políticas de "desarrollo" impulsadas, los empresarios nacionales consiguen sacar gran provecho económico en diversos niveles: en el ámbito agrícola y pecuario, en parte de la industia manufacturera, la industria de la construcción y parte de los servicios y finanzas privadas.[33]

Entre empresarios y gobierno se establece lo que se conoce despectivamente como "negociados", es decir, tratamientos económicos basados en el soborno y la corrupción que van a concluir más tarde en el establecimiento de un sistema de chantajes y malversación galopante que produce una severa separación de un amplio sector de los empresarios del "entorno" del gobierno.[34]

Además, como complemento, existe un cúmulo de deudas no solventadas con industriales, bancos, comerciantes y el sector servicio. Para 1956, las erogaciones exigidas por los proyectos del régimen desbordan su capacidad financiera y sus disponibilidades fiscales inmediatas: se produce una falta de liquidez para cancelar las acreencias.[35]

A partir de estos instantes y en función de las modificaciones visibles del clima político del país, los empresarios nacionales comienzan a cerrar filas con la oposición para enfrentarse al régimen.

En tercer lugar, las relaciones que se establecieron con los diferentes partidos políticos y la institucionalidad, fueron -también- oscilantes. Desde un principio, AD fue excluido expresamente del juego político. Desde la huelga petrolera organizada por el PCV, este partido, que inicialmente fue tolerado, acompañó a AD en su ilegalización.

En relación con el clima político precedente y las ofertas que hacía la junta de gobierno, los partidos URD y COPEI apoyaron su instauración como gobierno de transición. Estos partidos contribuyeron a la estabilidad del régimen desde el momento en que aceptan participar, a través de sus máximos dirigentes Jóvito Villalba y Rafael Caldera, en la elaboración del **Estatuto electoral** para el proceso de 1952.[36]

Por su lado, AD mantiene una labor clandestina dentro de su mismo esquema de acción precedente: el "putchismo"[37], organiza con oficiales de las FFAA numerosos complots que son sucesivamente abortados y en los cuales se produce la detención de la mayoría de sus máximos dirigentes, como Alberto Carnevalli y la muerte de otro, considerado uno de los más valiosos políticos de aquél entonces, Leonardo Ruíz Pineda.

El PCV desarrolla su actividad alrededor de los trabajadores, fundamentalmente, los petroleros. Más tarde ambos partidos convergen en un proyecto único: La Junta Patriótica, que también integra URD, organización que va a liderizar el proceso final del derrocamiento del régimen dictatorial.

Para el momento de las elecciones de 1952, aparte de la presencia de COPEI y URD, se encuentra un partido creado por el régimen para participar en los comicios: **Frente Electoral Independiente** (FEI)[38] y, por su lado, AD resuelve presentar una organización política legal: **Bloque Democrático Nacional**, fundada por simpatizantes del partido. La actitud consecuente del gobierno fue apresar y expulsar a los principales directivos de la organización.[39]

El fraude es el resultado de estos comicios que conducen a la frustración y la protesta a URD y COPEI. El gobierno hace las consultas pertinentes dentro de las FFAA y tras su manifiesto apoyo, se exige la renuncia de los miembros de la Junta de Gobierno y se nombra a Pérez Jiménez luego de "algunos trámites burocráticos" como Presidente Constitucional hasta el año de 1957.

Inmediatamente, se produce una manifestación por el recién constituido **Frente Nacional de Resistencia**. Sus resultados fueron, la expulsión o detención de numerosos dirigentes, entre ellos, algunos de URD.[40]

El próximo paso fue la instalación de la **Asamblea Nacional Constituyente**, "fabricada" a través de la convocatoria (mediante sobornos, sostienen García y Camacho) de suplentes a los cargos, tanto de URD como de COPEI. Con esto, se convalida el fraude y se despeja la sensación de ausencia de apoyo social al régimen.[41]

Abierta ya la fase claramente dictatorial del período, el régimen busca, mediante la aplicación de diversos mecanismos, consolidar su posición de dominio sobre la vida política nacional. En el año de 1953, se sanciona una nueva Constitución para el país (la vigésima cuarta), en la cual, entre otras cosas, se le concede al Presidente amplios poderes y se le asigna al Estado una función rectora en las actividades económicas.[42]

El año siguiente, se inicia una amplia reforma administrativa por la cual se organizan o estructuran todos los ministerios en cuatro "bloques" discriminados según las funciones a cumplir; estos bloques fueron: **Alta Política** (RRII, Defensa y Hacienda, actuando directamente sobre la "cosa pública") de la **Producción** (Fomento y Agricultura y Cría). **Complementarios de la Producción** (Obras Públicas, Trabajo, Minas e Hidrocarburos). **Servicios Generales** (Sanidad, Educación, Justicia y Comunicaciones).

Ambas medidas tenían como claro objetivo someter a su control la mayor cantidad de instancias de poder y decisión posibles.

La última de las relaciones que queremos exponer, recae sobre la "base" de la sociedad civil: los trabajadores y el movimiento estudiantil. Al principio de este artículo, señalamos la opción represiva como un mecanismo utilizado en este período para garantizar la integración de la sociedad al proyecto político vigente; pues bien, es aquí y con los sectores indicados, cuando y donde cobra vigencia tal actitud represiva.

Para decirlo en palabras de Stambouli, la intención u objetivo perseguido con respecto a los sectores sociales mencionados, es el de su "desmovilización". Desde todos los ángulos, sus actividades disidentes o reinvindicativas fueron reprimidas permanentemente.[43]

Desde 1949, fueron ilegalizados las organizaciones de trabajadores (CTV, FC, etc.). En el año 50, fue reprimida la huelga petrolera; igualmente, se revoca o anula el derecho a huelga.[44] Dentro del sector estudiantil se produce una crisis que condujo al cierre de la Universidad Central, ¿la causa?, la creación de un **"Consejo de Reforma"** que sustituyendo al Consejo Universitario se proponía asumir el gobierno y reorganización de la Universidad.

El sector universitario respondió mediante la creación de una "Comisión Interpartidista", que exigía la resolución de tres problemas cruciales: la libertad de los estudiantes detenidos, la reincorporación de los expulsados y la disolución del Consejo de Reforma. Los miembros de dicha comisión fueron detenidos.[45]

Poco a poco, paso a paso, se logra consumar el objetivo del gobierno. Durante casi cuatro años, no se produce ningún suceso que consiga sacudir la tranquilidad del régimen.

VIII

Si bien es cierto que es común afirmar que entre los años de 1953 y 1957, se vivió un ambiente de relativa estabilidad; que la oposición política se mantuvo dentro de lo que puede llamarse **"bajo perfil"**, no es menos cierto que desde 1954, ya comienza a notarse un nuevo ascenso en el papel de las fuerzas políticas. Desde aquel momento, se puede decir que existía un **"caldo de cultivo"** apropiado para una nueva rebelión.

Los mismo sectores y actores que para 1948 hicieron posible la entronización de los militares en el poder, para 1958 hicieron **causa común** desdiciendo el "todos contra todos" que condujo al golpe, y se "unen" alrededor de la Junta Patriótica, encargada de coordinar los esfuerzos insurgentes.

En aquellos momento, el régimen se sostenía sobre bases muy endebles que terminaron de debilitarse con el plebiscito reeleccionario del gobierno que concluyó por ganarle el rechazo de la totalidad de los sectores sociales que están participando políticamente en la vida nacional.[46]

El régimen se encontraba inmerso en una corrupción desenfrenada. Era un gobierno militar que gobernada sin los militares y se separa, en consecuencia, de su principal apoyo. En 1956 la Iglesia Católica critica al régimen durante la celebración del II Congreso Eucarístico, se cuestiona la injusta distribución de la riqueza. En 1957 nuevamente la Iglesia asume su actitud de denuncia. En una pastoral, el Arzobispo de Caracas, Arias Blanco, cuestiona la situación de pobreza que embarga a la masa de los trabajadores ante la riqueza de la que se hace ostentación en el país.[47] Con este documento, la Iglesia sorprende, por su difusión y significación, al propio gobierno y asume una posición diametral con respecto a los años 1948 y 1952.

Todo esto conduce, tras numerosas y diversas manifestaciones de oposición al gobierno, emitidas por la multiplicidad de grupos sociales, interesados, a una coalición política generalizada, que logra deponer a la dictadura el 23 de enero de 1958

NOTAS Y BIBLIOHEMEROGRAFIA

1 CASTILLO, Ocarina: **Los Años del Buldozer. Ideología y Política. 1948-1958** Caracas, Tropykos, APUCV. CENDES. 1990, pp. 31-59.

2 STAMBOULI, A.: **Crisis Política: Venezuela. 1945-1958**. Caracas, Ateneo 1980 p. 92.

3 CASTILLO. **Ob. cit.** p. 45.

4 Idem. p. 56. Estos tres momentos plantean por parte de los actores fundamentales del período, la asunción de conductas, igualmente dispares y contradictorias en sus diversos instantes.

5 PARSONS, Talcott.: "Los Sistemas Sociales", **Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales**. T. IX, Bilbao, Aguilar, 1979; pp. 710 ss.

6 Idem.

7 Medios para asegurar la lealtad y estimular la participación popular.

8 PARSONS. **ob. cit.**

9 Véase: Vallenilla L., L.: "Los Principios Constitucionales del Libertador. La Ley Boliviana". **Cesarismo Democrático**. pp. 193-231.

10 SOSA, Arturo: **El Pensamiento Político Positivista Venezolano**. "Pensamiento Político Venezolano". **La Doctrina Positivista**, Caracas-Centauro, 1985.

11 Stambouli: **ob. cit.** p. 94. Castillo: **ob. cit.** p. 44. Rivas R., José: **Historia Gráfica de Venezuela**, Caracas, Editor, 1977, pp. 220-222.

12 Véase: RAMÍREZ, Mac-Gregor: **Una Época**, Madrid, Edine, s.f.; p. 27.

13 GARCÍA PONCE y CAMACHO BARRIOS: **Diario de la Resistencia y la Dictadura. 1948-1958**, 2a. ed., Caracas, Centauro, 1982; p. 32.

14 **Libro Negro 1952**. (Edición facsimilar), Caracas, Avilarte, 1974; p. 7.

15 **Idem**. p. 26.

16 STAMBOULI: **ob. cit.** p. 87-88.

17 RODRÍGUEZ C., Manuel V.: **Pérez Jiménez y la Dinámica del Poder. 1948-1958**, Caracas, El Dorado, 1991; pp. 11-12.

18 GARCÍA P. Y CAMACHO B.: **ob. cit.** p. 89. CASTILLO: **ob. cit.** pp. 36-38.

19 CASTILLO: **ob. cit.** p. 36; igualmente p. 46 ss.

20 STAMBOULI: **ob. cit.** pp. 93-94.

21 RODRÍGUEZ, M.: **ob. cit.** pp. 93-94.

22 GARCÍA Y CAMACHO.: **ob. cit.** p. 12 ss.

23 **Idem**. pp. 51-52.

[24] RODRÍGUEZ, M.: **ob. cit.** p. 11. CASTILLO, O.: **ob. cit.**

[25] CASTILLO: **ob. cit.** pp. 36-37 y 46-47. GARCÍA Y CAMACHO: **ob. cit.** p. 142-143. No obstante, Rodríguez Campos sostiene que tales medidas proteccionistas no llegaron a cumplir su objetivo. **ob. cit.** p. 100. Véase también: RANGEL, D. A.: **La Revolución de las Fantasías**, Caracas, Grijalbo, 1988; pp. 38 ss.

[26] STAMBOULI: **ob. cit.** p. 95.

[27] RODRÍGUEZ, M.: **ob. cit.** pp. 113-114.

[28] GARCÍA Y CAMACHO: **ob. cit.** pp. 113-114.

[29] **Idem**. pp. 108-109.

[30] GARCÍA Y CAMACHO: **ob. cit.** p. 51.

[31] **Idem.** pp. 118 ss.

[32] **Idem**. p. 99; p. 145.

[33] RODRÍGUEZ, M.: **ob. cit.** p. 10. CASTILLO: **ob. cit.** p. 45.

[34] GARCÍA Y CAMACHO. **ob. cit.** pp. 211 ss.

[35] RODRÍGUEZ, M.: **ob. cit.** pp. 232 ss.

[36] Véase: **El Libro negro**. **ob. cit.** Introducción de Ruíz Pineda. También: pp. 26-38. Igualmente: GARCÍA y CAMACHO: **ob. cit.** p. 145.

[37] STAMBOULI: **ob. cit.** p. 90.

[38] GARCÍA Y CAMACHO: **ob. cit.** pp. 116-117.

[39] **Idem**. p. 90.

[40] **Idem**. p. 136.

[41] **Idem**. p. 142.

[42] CASTILLO: **ob. cit.** p. 53.

[43] **Ob. cit.** pp. 87-88.

[44] CASTILLO. **ob. cit.** p. 55.

[45] **Idem.** p. 42.

[46] RODRÍGUEZ, M.: **ob. cit.** p. 11. CASTILLO, O.: **ob. cit.** pp. 56-57.

[47] GARCÍA y CAMACHO: **ob. cit.** pp. 249 ss.

Licenciado en Historia por la Universidad de Los Andes (1983). Profesor de la Escuela de Historia de esta Universidad adscrito al Departamento de Historia de América y Venezuela; tesista de la Maestría en Ciencias Políticas (CEPSAL); miembro del Grupo de Investigación Sobre Historiografía de Venezuela.

RESUMEN.

Usualmente, el conocimiento acerca del período perezjimenista se ha debatido entre distorsiones, ocultamientos y la generalización de lugares comunes: los opositores han enfatizado los aspectos represivos del régimen y sus defensores lo han legitimado en función de sus indiscutibles logros materiales y del crecimiento económico. Paralelamente, se ha soslayado el hecho de que muchos grupos de interés (el clero y los empresarios), extrajeron provecho privado de sus relaciones con el dictador; que algunos de los sectores que se asociaron para su derrocamiento fueron su apoyo inicial y quienes usufructuaron su cercanía con el poder. Poco se habla de que el régimen, en función de una definición particular de los fines colectivos, logró su aceptación y, en consecuencia, generar apoyos importantes al interior y exterior de la sociedad venezolana. El objetivo de este trabajo es abordar el período perezjimenista desde el punto de vista de la consideración de estos factores poco tratados en las discusiones "populares" acerca del tema.

Palabras Claves:
Período Perezjimenista, Grupos de intereses, Discusiones sobre el tema

ABSTRACT

Usually the debate about the Pérez-Jiménez period has focused on distortions, bias and the spreading of clichés: the opposition has emphasized the repressive aspects of the regime and its defenders have legitimized it because of its indisputable material achievements and economic growth. At the same time, it has been overlooked that many interest groups (the clergy, businessmen, etc.) benefited personally from their relationships with the dictator and that some of the sectors that united to oust him were initial supporters and profited from their proximity to power. It is rarely recognized that the regime managed to make itself accepted and as a consequence generated important support both inside and outside Venezuelan society. The objective of this paper is to approach the Pérez-Jiménez period from a point of view rarely considered in "popular" discussions of the theme.

Key Words:
The Pérez Jiménez period, Interest grupes, Discussions of the theme